

CLAUDIA LORENA MOSCOSO GILON

Abogada

U. Central del Valle del Cauca

Calle 27 # 27-16 of 202

Tuluá Valle

2248523

Señor

JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUGA VALLE - (Reparto)

E.

S.

D.

REFERENCIA: **ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

DEMANDANTE: **JOSE ELMAR HENAO MARIN**

DEMANDADO: **LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL -
MUNICIPIO DE TULUA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUA.**

CLAUDIA LORENA MOSCOSO GILON, identificada con CC No 29.760.537 de Riofrio Valle y portadora de la T.P No 191.992 del Consejo Superior de la Judicatura; obrando de conformidad con el poder especial que para el efecto me fue conferido por el señor **JOSE ELMAR HENAO MARIN**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Tuluá Valle, con cédula de ciudadanía No. 6.138.610, respetuosamente me dirijo al señor **JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUGA VALLE**, en ejercicio de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrada en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para presentar la demanda con la que ha de darse inicio a un proceso ordinario en contra de **LA NACION - MINISTERIO DE LA DEFENSA - POLICIA NACIONAL - MUNICIPIO DE TULUA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUA**; providencia en la que se resuelva hacer las declaraciones y condenas que en el respectivo acápite se indican.

1. DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES.

1.1 **DEMANDANTE:** El señor **JOSE ELMAR HENAO MARIN**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.138.610 de Bolívar Valle representado por la suscrita doctora **CLAUDIA LORENA MOSCOSO GILON**, identificada con CC No 29.760.537 de Rio frio Valle y portadora de la T.P No 191.992 del Consejo Superior de la Judicatura.

1.2 DEMANDADOS:

LA NACION- MINISTERIO DE LA DEFENSA representados legalmente por **JUAN CARLOS PINZON BUENO**.

POLICIA NACIONAL representado legalmente por el General **RODOLFO PALOMINO LOPEZ**.

MUNICIPIO DE TULUA –, representados legalmente por el Ingeniero **JOSE GERMAN GOMEZ GARCIA**,

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUA, representado legalmente por **JUAN CARLOS FERNANDO HENAO SANDOVAL**, o por quienes hagan sus veces al momento de notificación.

2. PRETENSIONES.

2.1 **Declarase** la Nulidad de la **Resolución resolución No 144597 de 19 de agosto de 2014**, proferida por el DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUA, el cual declaró contravencionalmente responsable al señor **JOSE ELMAR HENAO MARIN**, identificado con la CC. No. 6.138610, por violación al reglamento de tránsito, por conducir en estado de embriaguez y en consecuencia de lo anterior se le impone el pago de la multa de catorce millones setecientos ochenta y cuatro mil pesos (\$14.784.000.00).

2.2 **Declarase** la Nulidad de la **Resolución No No 340-54.03.8992 de 05 de enero de 2015**, acto administrativo notificado el día 16 de marzo de 2015 de manera personal, el cual resolvió confirmar en todas su partes la resolución No 144597 del 19 de agosto de 2014.

2.3 **Declarase** la Nulidad de la **resolución No 280-054.0176 de 10 de abril de 2015, acto administrativo notificado el día 29 de abril de 2015 de manera personal**, en la cual el Alcalde del municipio de Tuluá Valle **JOSE GERMAN GOMEZ GARCIA**, actuó como segunda instancia y resolvió confirmar en todas su partes la **Resolución No 144597 del 19 de agosto de 2014**.

2.4 **Declarase** que los demandados expidan Resolución por medio de la cual resuelva, declarar **no contravencionalmente responsable** al señor **JOSE ELMAR HENAO MARIN**, identificado con la CC. No. 6.138.610, dentro del proceso contravencional No **141626** adelantado por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUA y a efectos de dar de baja del sistema integrado de multas el comparendo No 800006976071.

- 2.5 Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho **condenase** a **LA NACION- MINISTERIO DE LA DEFENSA - POLICIA NACIONAL- MUNICIPIO DE TULUA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUA**, a pagar al señor **JOSE ELMAR HENAO MARIN**, lo correspondiente a la suma de La suma de SEIS MILLONES PESOS (\$6.000.000.00 M/CTE.) Correspondiente a los pagos por concepto de servicios de conductor contratados, generados después de iniciado el proceso contravencional y hasta la fecha de presentación de la demanda.
- 2.6 Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho **condenase** **LA NACION - MINISTERIO DE LA DEFENSA - POLICIA NACIONAL - MUNICIPIO DE TULUA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUA**, a pagar al señor **JOSE ELMAR HENAO MARIN**, La suma de CINCO MILLONES PESOS (\$5.000.000 M/CTE.) Correspondiente al pago de honorarios de la profesional del derecho que asistió el proceso contravencional hasta la última instancia, en la cual quedo agotada la vía gubernativa.
- 2.7 Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho **condenase** a **LA NACION - MINISTERIO DE LA DEFENSA - POLICIA NACIONAL- MUNICIPIO DE TULUA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUA**, a pagar al señor **JOSE ELMAR HENAO MARIN**, las sumas debidamente reconocidas en cumplimiento de la sentencia y a indexar las mismas.
- 2.8 Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho **condenase** a **LA NACION - MINISTERIO DE LA DEFENSA - POLICIA NACIONAL- MUNICIPIO DE TULUA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUA**, a pagar al señor **JOSE ELMAR HENAO MARIN**, la suma que corresponda por concepto de costas y agencias en derecho que se causaron en este proceso.
- 2.9 Se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3. **FUNDAMENTOS DE HECHO DE LAS PRETENSIONES.**
- 3.1 El día 11 de mayo del año 2014, a las 06:00 am, sobre la carrera 30 de la ciudad de Tuluá, mi representado en compañía de su amigo FERNANDO OSPINA, se desplazaban en un vehículo de servicio particular que era conducido por el señor OSPINA, cuando inesperadamente se explotó una llanta delantera del lado izquierdo del automotor, perdiendo el control y termino por montarse al separador de la vía.

- 3.2 El señor FERNANDO OSPINA, salió a buscar ayuda para poder mover el vehículo, mientras tanto el demandante se quedó cuidando el vehículo; siendo las 06:45 am, se acercó una patrulla de la Policía Nacional, uno de los policiales procedió a sacar las llaves del carro, metió la mano a la guantera y saco los documentos del vehículo, según lo relata mi cliente en los descargos dentro del proceso contravencional, así las cosas la unidad policial, procedió a requerirle al demandante la cedula y la licencia de conducción, pese a que en repetidas ocasiones el demandante solicito a el servidor público auxilio y comprensión por la situación de accidente con el vehículo.
- 3.3 Sin embargo el señor Policía procedió a llamar a los agentes de tránsito y llamar una grúa, para que se llevara el vehículo, pasado media hora llego al lugar de los hechos el señor agente de tránsito del municipio de Tuluá **CARLOS ALEXANDER LONDOÑO VANEGAS**, quien procedió a realizar la prueba de alcoholemia y posteriormente la imposición de la orden de comparendo No 768340006976071 del día 11 de mayo de 2014, pese a las explicaciones y solicitudes realizadas por el demandante como relata en sus descargos dentro del proceso contravencional.
- 3.4 Posteriormente a estos hechos, mi representado rechazó la orden de comparendo interpuesta por el servidor público, ejerció su derecho a la defensa, y se llevó a cabo el proceso contravencional No 141626, precedido por el Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial del Municipio de Tuluá.
- 3.5 El demandante, presentó testimonio de los hechos, agente de tránsito **CARLOS ALEXANDER LONDOÑO VANEGAS** fue interrogado en su oportunidad, se ejercieron los recursos de ley, aduciendo las dudas razonables a este proceso contravencional, invocando el principio de favorabilidad, y la aplicación al derecho de presunción de inocencia, además que el procedimiento ejercido por los funcionarios fue opuesto a las normas establecidas en Tránsito y Transporte, como se manifestó en los apartes de los alegatos de conclusión:

*“.....Se probó plenamente en el proceso, por medio del interrogatorio de parte resuelto por el señor agente de tránsito, **ALEXANDER LONDOÑO VANEGAS**, que en ningún momento la autoridad de tránsito y transporte competente, se dispuso a dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 22 de la ley 1383 de 2010, norma que señala claramente el procedimiento a seguir para imponer un comparendo ante la comisión de una contravención, la cual me permito enunciar:*

ARTÍCULO 22 DE LA LEY 1383 DE 2010:

*“...Procedimiento. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo: **Ordenará detener la marcha del vehículo** y le extenderá al conductor la orden de comparendo...”*

Pues se deja claro por parte del señor agente de tránsito que el presunto infractor fue requerido por patrulleros de la Policía Nacional y que los documentos del vehículo y de mi representado que se le entregaron para el requerimiento de la prueba de alcoholemia los recibió por parte del patrullero de la policía mas no fue el mismo agente de tránsito el que intervino en el procedimiento directamente y como lo ordena la ley.

Resolución No 003027 del 27 de julio de 2010, título II capítulo 4 numeral 3:

*“...Diligenciar la orden de comparendo de acuerdo a la realidad de los hechos acaecidos y **observados**....”*

- 1. El agente de tránsito, en audiencia para la ratificación de la orden de comparendo o aclaración de tiempo, modo y lugar que dio origen a la imposición del mismo; el artículo 165 de la ley 1564 de 2012 y complementando con la ley 769 de 2002 articulo 162; que dice así:*

*“...**Artículo 162. Compatibilidad y analogía.** Las normas contenidas en el Código Contencioso Administrativo, Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Código de Procedimiento Civil, **serán aplicables a las situaciones no reguladas por el presente código**, en cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista para el caso en análisis.....” (Negrilla fuera del texto original)*

*Pero si bien es cierto, estas argumentaciones y aportes de pruebas por parte del agente de tránsito, resultan infructuosos y tentativas al derecho constitucional del debido proceso, pues la norma es clara cuando se refiere que otras disciplinas del derecho serán aplicables a las situaciones **no reguladas** en el Código Nacional de Tránsito y la Movilidad; situación que resulta contrario en este procedimiento pues para el agente de tránsito **ALEXANDER LONDOÑO VANEGAS**, es claro y así lo confirmo en la misma audiencia que sus **obligaciones y funciones para imponer la orden de comparendo** está debidamente **reguladas** por las normas vigentes del ordenamiento jurídico como son la ley 769 de 2002, ley 1383 de 2010 y la resolución No 3027 del 27 de julio de 2010.*

*Se probó plenamente en el proceso, por parte del testigo presentado por la defensa del presunto infractor señor **FERNANDO OSPINA OSORIO**, que la persona que conducía el vehículo el día de la imposición de la orden de comparendo fue este mismo testigo y que por un accidente de una explosión de una llanta abandonó el lugar pues salió en busca de ayuda, dejando al presunto infractor al cuidado del vehículo; pues estos hechos son verificados por el testigo **LUIS ARMANDO BONILLA**, cuando confirma que llego al lugar de los hechos a auxiliar al presunto infractor en su vehículo para remolcarlos.....”*

- 3.6 El Director de Departamento Administrativo de Seguridad y Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá, dicto la **resolución No 144597 de 19 de agosto de 2014**, mediante la cual resolvió declarar contravencionalmente responsable al demandante, por violación del artículo 4 de la Ley 1696 de diciembre 19 de 2013 y en consecuencia le impuso al convocante el pago de la multa por valor de catorce millones setecientos ochenta y cuatro mil pesos (\$14.784.000.00).*
- 3.7 Teniendo en cuenta la resolución emitida por Director de Departamento Administrativo de Seguridad y Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá, el demandante interpuso el recurso de apelación en contra del acto*

administrativo en su oportunidad, manifestando las falencias presentadas en el proceso administrativo y así mismo explicando los hechos y derechos que fueron vulnerados por los funcionarios públicos.

3.8 Se indicó al superior en el recurso de alzada:

“.....Contrario sensu, está probado en el proceso que la autoridad de tránsito competente, no obró de manera diligente y cuidadosa al momento de imponer la orden de comparendo al presunto infractor, y que en consecuencia sí hubo una violación al debido proceso por falta, de omisión y negligencia del agente de tránsito, por las siguientes razones:

PRIMERA: El señor agente de tránsito **ALEXANDER LONDOÑO VANEGAS** no cumplió, con su Obligaciones y responsabilidades como miembro de cuerpo de control operativo al momento de impartir la orden de comparendo conforme a los hechos acaecidos y observados; pues, por medio del interrogatorio de parte resuelto el día 01 de agosto de 2014 por el señor agente de tránsito **se probó** que en ningún momento se dispuso a dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 22 de la ley 1383 de 2010, norma que señala claramente el procedimiento a seguir para imponer una orden de comparendo ante la comisión de una contravención, la cual me permito enunciar:

ARTÍCULO 22 DE LA LEY 1383 DE 2010:

*“....Procedimiento. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo: **Ordenará detener la marcha del vehículo** y le extenderá al conductor la orden de comparendo...”*

En el mismo interrogatorio de parte, quedo probado que el agente de tránsito **ALEXANDER LONDOÑO VANEGAS**, no dio cumplimiento con lo ordenado en el **MANUAL DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO** el cual me permito transcribir lo que a la letra dice:

RESOLUCIÓN 003027 DEL 26 DE JULIO DE 2010 TITULO II CAPITULO 4 NUMERAL TERCERO:

*“Obligaciones y responsabilidades de los miembros de cuerpo de control operativo.....Diligenciar la orden de comparendo de acuerdo a la realidad de los hechos **acaecidos y Observados...**” (Negrita fuera del texto original)*

El deber legal del **agente de tránsito** era la de dar cumplimiento a la norma descripta para la imposición de la orden de comparendo, en los parámetros que la misma ley determina para ejercer sus funciones; pues como se evidencia claramente, el agente de tránsito no vio al presunto infractor conduciendo el vehículo, por lo tanto **no fue sorprendido conduciendo** por la autoridad competente para este caso.

Luego entonces, como considera el señor Director de Departamento Administrativo de Seguridad y Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá Valle, en dicha resolución, que el presunto infractor **fue sorprendido conduciendo**, si el mismo **agente de tránsito** quien es la autoridad competente manifestó claramente que **no vio, ni observo, ni le consta** que el presunto infractor era quien conducía el vehículo y que tampoco se dispuso a dar **cumplimiento al artículo 22 de la ley 1383 de 2010**, al momento de impartir la orden de comparendo.

TERCERA: El señor Director de Departamento Administrativo de Seguridad y Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá Valle, considera también en dicha resolución, parte del considerando numeral 6, objeto de este recurso que:

“(…)

Toda vez que de la aceptación expresa realizada por el infractor y del informe de tránsito rendido por el agente de tránsito se deduce efectivamente la comisión de la conducta infractora.”

Si bien es cierto, el presunto infractor en ningún momento a realizado ninguna clase de **aceptación expresa**, como lo atribuye el señor Director de Departamento Administrativo de Seguridad y Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá Valle, por el contrario cuando esta entidad le pregunto a mi representado si aceptaba o rechazaba la imposición del comparendo, como consta en la audiencia realizada el día 29 de mayo de 2014, el mismo presunto infractor contesto: “ **el comparendo lo rechazó tajantemente....**”; luego no le asiste razón de hecho ni de derecho al ente administrativo para aseverar hechos que no han ocurrido, convirtiéndose en una irregularidad y atribuyéndose esta actuación a la presunción de inocencia para el presunto infractor.....”

- 3.9 El Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá, representado por el señor DIEGO MAURICIO LOPEZ VALENCIA, como Director, actuó como primera instancia y profirió **la resolución No 340-54.03.8992 de 05 de enero de 2015**, acto administrativo notificado el día 16 de marzo de 2015 de manera personal, el cual resolvió confirmar en todas su partes la resolución No 144597 del 19 de agosto de 2014, proferida por el Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá, y concedió el recurso de apelación y remitida al superior jerárquico.
- 3.10 El municipio de Tuluá, representado por el señor JOSE GERMAN GOMEZ GARCIA, actuó como segunda instancia y profirió la **resolución No 280-054.0176 del 10 de abril de 2015**, acto administrativo notificado el día **29 de abril de 2015 de manera personal**, el cual resolvió confirmar en todas su partes la resolución No 144597 del 19 de agosto de 2014.
- 3.11 El demandante labora en el municipio de Andalucía, por la cual se vio, en la obligación de contratar los servicios de un conductor, para que lo transporte, generando gastos en su economía, pues la licencia está suspendida desde el momento que inicio el proceso contravencional.
- 3.12 También para ejercer su derecho a la defensa en el proceso contravencional ante el Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá contrato servicios jurídicos de abogado.
- 3.13 Solicite por medio de derecho de petición radicado ante el Mayor GIOVANNI GUERRERO PARRA, comandante Segundo Distrito de Policía de Tuluá, para que me informara si existían convenio entre la Policía de Tuluá y la alcaldía municipal del departamento administrativo de movilidad y seguridad vial, para que los efectivos policiales ejerzan funciones correspondientes a las normas de tránsito y transporte en el municipio de Tuluá.

- 3.14 De manera atenta recibí contestación al derecho de petición No 1614/ COSEC-DISPO 2-1-10, del día 28 de Mayo de 2014, emitido por el Mayor GIOVANNI GUERRERO PARRA, comandante Segundo Distrito de Policía de Tuluá, en 1 folio, el cual me indico:

“.... Que actualmente no hay convenio entre la alcaldía municipal a través del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá y la Policía Nacional.... la función de los policiales..... se hacen de manera preventiva y de control..... Donde se le da a conocer a la persona sobre la posible infracción al Código de Tránsito Terrestre y posteriormente se procede a tomar contacto con los funcionarios de Tránsito Municipal quienes determinan si hay lugar o no a la aplicación del comparendo....”

- 3.15 De manera atenta recibí aclaración a la respuesta anterior mediante oficio No 1732/ COSEC-DISPO 2-1-10, del día 9 de junio de 2014, emitido por el Mayor GIOVANNI GUERRERO PARRA, comandante Segundo Distrito de Policía de Tuluá, en un folio, el cual me indico:

“....siendo nuestro servicio netamente preventivo, informamos de la comisión de los hechos ante la autoridad competente para tal fin.....en este caso llamamos a la autoridad de transito quien solicitara la respectiva documentación y será este quien decida si hay argumentos válidos para imponer un comparendo ante la secretaria de tránsito municipal.....le recuerdo que no tenemos facultades de transito como tampoco se tiene un grupo especializado de tránsito de la policía en esta localidad, pero esto no impide que hagamos nuestro trabajo al hacer cumplir la ley 1383 de 2010 como lo son el control sobre maniobras peligrosa, personas sin casco.....”

- 3.16 Pero si bien es cierto, y debe ser materia de estudio y referencia, además de un hecho dentro de esta demanda, son las distintas maneras de interpretar los diferentes procesos contravencionales que se presentan en el **MUNICIPIO DE TULUA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUA**, correspondientes a las alcoholemias, pues se refleja también violación al derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 Constitución Nacional, no se justifica que estos mismos entes de primera y segunda instancia, conciban en **Resolución No 280-054-0129 de 16 de marzo de 2015**, que es prueba suficiente que el agente de tránsito no cumplió con lo ordenado en la ley, en cuanto a observar directamente la infracción y no por parte de un tercero y que esta sea la imperiosa obligación que tienen los miembros de control operativo y por estas razones y fundamentos revoca la resolución que declaró la contravención y que en el proceso que es materia de esta demanda se acuda a recurso de alzada ante estas instituciones de primera y segunda instancia con los mismos fundamentos de hecho y de derecho y las respuesta sea confirmar la resolución, no cabe duda que nos encontramos frente a un criterio de desigualdad falta de interpretación y lo más grave a una violación a los derechos fundamentales y al debido proceso, frente a instituciones como **MUNICIPIO DE TULUA - DEPARTAMENTO**

ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUA, los cuales deben de tratar todos los casos con principios de igualdad y debido proceso.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Normas violadas y concepto de la violación.

La preceptiva jurídica que se plantea como infringida se contrajo a los artículos **1º, 13, y 29** de la Constitución Política.

- ❖ CODIGO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE.
- ❖ LEY 1383 DE 2010 ARTÍCULO 22.
- ❖ RESOLUCIÓN 003027 DEL 26 DE JULIO DE 2010 TITULO II CAPITULO 4 NUMERAL PRIMERO Y CAPITULO 5 CASILLA 17. EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE
- ❖ LEY 1696 DE DICIEMBRE 19 DE 2013
- ❖ LEY 734 DE 2002

Especialmente como vulnerado el derecho fundamental al Debido Proceso, partiendo del principio de buena fe y credibilidad al momento de interpretar las normas por las instancias correspondientes y por la actuación del servidor público como el señor agente de tránsito **CARLOS ALEXANDER LONDOÑO VANEGAS**, se quebranta a la luz de la verdad, todo concepto de credibilidad.

Está probado en el proceso que la autoridad de tránsito, no obró de manera diligente y cuidadosa al momento de imponer la orden de comparendo al presunto infractor, y que en consecuencia sí hubo una violación al debido proceso por omisión y negligencia del agente de tránsito, por las siguientes razones:

PRIMERA: El señor agente de tránsito **ALEXANDER LONDOÑO VANEGAS** no cumplió, con su Obligaciones y responsabilidades como miembro de cuerpo de control operativo al momento de impartir la orden de comparendo conforme a los hechos acaecidos y observados; pues por medio del interrogatorio de parte resuelto el día 01 de agosto de 2014, por el señor agente de tránsito **se probó** que en ningún momento se dispuso a dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 22 de la ley 1383 de 2010, norma que señala claramente el procedimiento a seguir para imponer una orden de comparendo ante la comisión de una contravención, la cual me permito enunciar:

ARTÍCULO 22 DE LA LEY 1383 DE 2010:

*“....Procedimiento. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo: **Ordenará detener la marcha del vehículo** y le extenderá al conductor la orden de comparendo...”*

En el mismo interrogatorio de parte, quedo probado que el agente de tránsito **ALEXANDER LONDOÑO VANEGAS**, no dio cumplimiento con lo ordenado en el **MANUAL DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO** el cual me permito transcribir lo que a la letra dice:

RESOLUCIÓN 003027 DEL 26 DE JULIO DE 2010 TITULO II CAPITULO 4 NUMERAL TERCERO:

*“Obligaciones y responsabilidades de los miembros de cuerpo de control operativo.....Diligenciar la orden de comparendo de acuerdo a la realidad de los hechos **acaecidos y Observados...**” (Negrita fuera del texto original)*

El deber legal del **agente de tránsito** era la de dar cumplimiento a la norma descrita para la imposición de la orden de comparendo, en los parámetros que la misma ley determina para ejercer sus funciones; pues como se evidencia claramente, el agente de tránsito no vio al presunto infractor conduciendo el vehículo, por lo tanto **no fue sorprendido conduciendo** por la autoridad competente para este caso.

Luego entonces, como considera el señor Director de Departamento Administrativo de Seguridad y Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá Valle, en dicha resolución, que el presunto infractor **fue sorprendido conduciendo**, si el mismo **agente de tránsito** quien es la autoridad competente manifestó claramente que **no vio, ni observo, ni le consta** que el presunto infractor era quien conducía el vehículo y que tampoco se dispuso a dar **cumplimiento al artículo 22 de la ley 1383 de 2010**, al momento de impartir la orden de comparendo.

SEGUNDA: Se probó plenamente en el proceso, por parte del testigo presentado por la defensa del presunto infractor señor **FERNANDO OSPINA OSORIO**, que la persona que conducía el vehículo el día de la imposición de la orden de comparendo fue este mismo testigo y que por un accidente de una explosión de una llanta abandonó el lugar, pues salió en busca de ayuda, dejando al presunto infractor al cuidado del vehículo; pues estos hechos son verificados por el testigo **LUIS ARMANDO BONILLA**, cuando confirma que llego al lugar de los hechos a auxiliar al presunto infractor en su vehículo para remolcarlos, en ningún momento procesal tacho al testigo, por lo cual esta prueba se suma a la presunción de inocencia y favorabilidad con el presunto infractor, para desvirtuar los hechos que se le imponen como presunto infractor.

TERCERA: El señor Director de Departamento Administrativo de Seguridad y Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá Valle, considera también en dicha resolución, parte del considerando numeral 6, objeto de este recurso que:

“(…)

Toda vez que de la aceptación expresa realizada por el infractor y del informe de tránsito rendido por el agente de tránsito se deduce efectivamente la comisión de la conducta infractora.”

Si bien es cierto, el presunto infractor en ningún momento a realizado ninguna clase de **aceptación expresa**, como lo atribuye el señor Director de Departamento Administrativo de Seguridad y Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá Valle, por el contrario cuando esta entidad le pregunto a mi representado si aceptaba o rechazaba la imposición del comparendo, como consta en la audiencia realizada el día 29 de mayo de 2014, el mismo presunto infractor contesto: **“el comparendo lo rechazó tajantemente....”**; luego no le asiste razón de hecho ni de derecho al ente administrativo para aseverar hechos que no han ocurrido, convirtiéndose en una irregularidad y atribuyéndose esta actuación a la presunción de inocencia para el presunto infractor.

CUARTA: El agente de tránsito, en audiencia para la ratificación de la orden de comparendo o aclaración de tiempo, modo y lugar que dio origen a la imposición del mismo; se apoyó en el artículo 165 de la ley 1564 de 2012 y complementando con la ley 769 de 2002 artículo 162; que dice así:

“...Artículo 162. Compatibilidad y analogía. Las normas contenidas en el Código Contencioso Administrativo, Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Código de Procedimiento Civil, **serán aplicables a las situaciones no reguladas por el presente código**, en cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista para el caso en análisis.....” (Negrilla fuera del texto original)

Pero si bien es cierto, estas normas fueron muy presentes en el procedimiento administrativo, por parte del agente de tránsito y el departamento administrativo de seguridad y movilidad vial de Tuluá, pero resultan infructuosos y tentativas de violación al derecho constitucional, pues la norma es clara cuando se refiere que otras disciplinas del derecho serán aplicables a las situaciones **no reguladas** en el Código Nacional de Tránsito y la Movilidad; situación que resulta contrario en este procedimiento pues para el agente de tránsito **ALEXANDER LONDOÑO VANEGAS**, es claro que sus obligaciones y funciones para imponer la orden de comparendo está debidamente **reguladas** por las normas vigentes del ordenamiento jurídico como son la ley 769 de 2002, ley 1383 de 2010 y la resolución No 3027 del 27 de julio de 2010.

QUINTA: Los errores de los que adolece la imposición de la orden de comparendo son tan evidentes, a la luz de la legalidad, pues se reflejan claramente la violación al debido proceso, el abuso de autoridad y la extralimitación a la funciones públicas por parte del Agente de Tránsito, cuando omitió dar cumplimiento a las normas estipuladas en la ley para ejercer su actividad de funcionario público y como miembro de control operativo; pues la misma legislación comprende que los agentes de tránsito como autoridad competente, deben ejercer su actividad con profesionalismo y deberán cumplir las normas constitucionales y las demás vigentes que determinen su condición de servidores públicos, basándose en los valores de ética, moral y respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos sin menoscabar el debido proceso al que tiene derecho todo colombiano.

El presunto infractor debe de dársele aplicación al principio de **PRESUNCION DE INOCENCIA**, pues la misma prueba de la orden de comparendo no fue es suficiente para determinar la responsabilidad del presunto infractor, y las dudas e irregularidades que se desprendieron del procedimiento deben de resolverse a favor de mi representado, por cuanto la imposición de la orden del comparendo fue una pruebas recolectada y obtenidas con violación al debido proceso, faltando a la norma constitucional artículo 29 CN, además que es una prueba que no reúne las condiciones legales establecidas en el artículo 22 de la ley 1383 de 2010, como quedo probado en el proceso.

Por otra parte encontramos el procedimiento administrativo, realizado por el señor Director de Departamento Administrativo de Seguridad y Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá Valle, el cual también vulnera el debido proceso y se suma a las irregularidades presentadas desde el momento de la imposición de la orden de comparendo, pasando por alto normas establecidas y configurando contrariedades en el proceso para determinar la presunta responsabilidad de mí representado, pues la autoridad que preside el proceso administrativo debe ser garante y no vulnerar las normas establecidas con el fin de perjudicar el derecho al debido proceso que tiene el presunto infractor, toda vez , que como se ha referenciado en este recurso y todo el proceso administrativo con la serie de dudas generadas, estas deben de ser resueltas a favor de mi representado partiendo del principio de presunción de inocencia y favorabilidad, pues no existe una prueba contundente por parte del agente de tránsito como autoridad competente que demuestre que el presunto infractor fue sorprendido conduciendo el vehículo en estado de embriaguez, pues la orden de comparendo ni siquiera está firmada por el presunto infractor y el video del cual se habla está viciada, además que el mismo agente de tránsito manifestó que no vio, ni observo, ni le consta, que el presunto infractor era quien conducía el vehículo y **que no dio cumplimiento a ley para imponer la orden de comparendo.**

Luego entonces, se deduce claramente que el señor Director de Departamento Administrativo de Seguridad y Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá Valle, omitió las declaraciones del agente de tránsito y de otras pruebas que demuestran la presunción de inocencia del presunto infractor y solo se limitó a declararlo contravencionalmente responsable, contribuyendo a la vulneración del debido proceso aquí descrita.

Los diferentes procesos contravencionales que se presentan en el **MUNICIPIO DE TULUA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUA**, correspondientes a las alcoholemias, violan el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 Constitución Nacional, no se justifica que estos mismos entes de primera y segunda instancia, conciban en **Resolución No 280-054-0129** de 16 de marzo de 2015, **que es prueba suficiente que el agente de tránsito no cumplió con lo ordenado en la ley, en cuanto a observar directamente la infracción y no por parte de un tercero y que esta sea la imperiosa obligación que tienen los miembros de control operativo y por estas razones y fundamentos revoca la resolución que declaró la contravención y que en el proceso que es materia de esta demanda se acuda a recurso de alzada ante estas instituciones de primera y segunda instancia con los mismos fundamentos de hecho y de derecho y las respuesta sea confirmar la resolución, no cabe duda que nos encontramos frente a un criterio de desigualdad falta de interpretación y lo más grave a un violación a los derechos fundamentales y al debido proceso**, frente a instituciones como **MUNICIPIO DE TULUA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUA**, los cuales deben de tratar todos los casos con principios de igual y debido proceso.

5. PRUEBAS.

5.1 Pruebas Documentales.

Con el fin de probar los hechos descritos en el respectivo acápite de la presente demanda respetuosamente me permito solicitar al Señor Juez decrete y valore como elementos del acervo probatorio los siguientes documentos que anexo:

5.1.1 Proceso contravencional No 141626, en 30 folios

5.1.2 Resolución No 144597 de 19 de agosto de 2014, en 5 folios.

5.1.3 Recurso de apelación.

5.1.4 Resolución No 340-054-03.8992 de 05 de enero de 2015, en 3 folios.

5.1.5 Resolución No 280-054-0176 de 10 de abril de 2015, en 4 folios.

5.1.6 Copia de derecho de petición radicado ante el Mayor GIOVANNI GUERRERO PARRA, comandante Segundo Distrito de Policía de Tuluá, en 1 folio.

5.1.7 Copia de respuesta a derecho de petición No 1614/ COSEC-DISPO 2-1-10, del día 28 de Mayo de 2014, emitido por el Mayor GIOVANNI GUERRERO PARRA, comandante Segundo Distrito de Policía de Tuluá, en 1 folio.

- 5.1.8 Copia de respuesta a derecho de petición No 1732/ COSEC-DISPO 2-1-10, del día 9 de junio de 2014, emitido por el Mayor GIOVANNI GUERRERO PARRA, comandante Segundo Distrito de Policía de Tuluá, en 1 folio.
- 5.1.9 Recibos de pago al conductor contratado por la prestación de servicio, en 5 folios.
- 5.1.10 Contrato de prestación de servicios jurídicos, suscrito con la abogada que representó el proceso contravencional, en 1 folio.
- 5.1.11 Recibos de pago a la abogada que representó el proceso contravencional, en 1 folio.
- 5.1.12 Resolución No 280-054-0129 de 16 de marzo de 2015.

PRUEBAS DOCUMENTALES CUYA REMISIÓN SE SOLICITA.

- ❖ Respetuosamente me permito solicitar a su Señoría, oficie al comandante Segundo Distrito de Policía de Tuluá, para que remita a su despacho, se allegue al expediente y se decrete y valore como prueba documental, copia íntegra y autentica del convenio existente entre la Policía Nacional y Departamento Administrativo de Seguridad y Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá Valle, para que la Policía ejerza funciones como autoridades de tránsito y transporte en el municipio de Tuluá, para la fecha en la que ocurrieron los hechos de la demanda.
- ❖ Respetuosamente me permito solicitar a su Señoría, oficie al director Departamento Administrativo de Seguridad y Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá Valle, para que remita a su despacho, se allegue al expediente y se decrete y valore como prueba documental, copia íntegra y autentica convenio existente entre la Policía Nacional y Departamento Administrativo de Seguridad y Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá Valle, para que la Policía ejerza funciones como autoridades de tránsito y transporte en el municipio de Tuluá, para la fecha en la que ocurrieron los hechos de la demanda.
- ❖ Respetuosamente me permito solicitar a su Señoría, oficie al director Departamento Administrativo de Seguridad y Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá Valle como primera instancia, para que remita a su despacho, se allegue al expediente y se decrete y valore como prueba documental, copia íntegra y autentica del proceso contravencional No 139988, del año 2014 donde figura como presunto infractor Fabián Andres Lasso Ríos, y la resolución No 141399 del 24 de abril de 2014.
- ❖ Respetuosamente me permito solicitar a su Señoría, oficie al Municipio de Tuluá Valle como segunda instancia, para que remita a su despacho, se allegue al expediente y se decrete y valore como prueba documental, copia íntegra y

autentica de la resolución No 280-054.0129 de marzo 16 de 2015 donde figura como presunto infractor Fabián Andres Lasso Ríos, y la cual tiene como efecto revocar la resolución de primera instancia.

6. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA.

La cuantía la estimo razonadamente en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS (\$6.000.000.00 M/CTE.) de Conformidad con la pretensión de mayor valor presentada en el numeral 1° del respectivo acápite.

7. COMPETENCIA.

7.1 Competencia por razón de la cuantía.

De conformidad con el postulado del numeral 3 del artículo 155 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establece que nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo tanto la competencia para conocer del eventual proceso es del Señor Juez Administrativo en primera instancia de Buga Valle.

7.2 Competencia por razón del factor territorial.

En razón a que el lugar donde se dictaron los actos administrativos fue el municipio de Tuluá, la competencia para conocer del eventual proceso es del Señor Juez Administrativo del Circuito de Buga Valle, de conformidad con numeral 2 del artículo 156 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

8. ANEXOS.

- 8.1 El poder especial que me fue conferido por señor JOSE ELMAR HENAO MARIN para presentar la demanda.
- 8.2 La constancia de realización de la audiencia de conciliación extrajudicial realizada ante la Procuraduría 60 Judicial I para asuntos Administrativos como requisito de procedibilidad.
- 8.3 La Constancia de realización de audiencia de conciliación extrajudicial en cumplimiento del requisito de procedibilidad exigido por la ley 1285 de 2.009, artículo 13.
- 8.4 Copia de la demanda y sus anexos para el traslado a los demandados.
- 8.5 Copia de la demanda y sus anexos para el traslado al Ministerio Público.
- 8.6 Copia de la demanda para el archivo del Despacho.
- 8.7 Copia de la demanda en medio magnética para el traslado Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
- 8.9 Los documentos aducidos como prueba en el respectivo acápite de la demanda.

CLAUDIA LORENA MOSCOSO GILON

Abogada

U. Central del Valle del Cauca

Calle 27 # 27-16 of 202

Tuluá Valle

2248523

9. NOTIFICACIONES.

- A la suscrita apoderada se la puede notificar en la calle 27 No. 27 – 16 oficina 202, de Tuluá Valle; teléfono fijo 2248523; e-mail abogadoencasacmg@hotmail.com.
- A mi poderdante se los puede notificar en la calle 27 No. 27 – 16 oficina 202 en Tuluá teléfono 2248523.

A LOS DEMANDADOS SE LES PUEDE NOTIFICAR:

- **MINISTERIO DE DEFENSA:** Carrera 54 No. 26-25 CAN teléfono 3150111 Bogotá.
- **POLICIA NACIONAL:** Carrera 59N° 26-21, CAN, Bogotá D.C. Teléfono 3159111.
- **MUNICIPIO DE TULUA:** Carrera 25 # 25-04 teléfono 2339300 Tuluá.
- **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUA:** carrera 30 vía Callejón Morales teléfono 2244750 y 2339300 ext. 8101 Tuluá.

Respetuosamente.

CLAUDIA LORENA MOSCOSO GILON

C. C. 29.760.537 de Rio frio Valle

T. P. 191.992 del C. S. J.